



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

Medellín, julio 7 de 2022

Radicado: 05001 31 05-003-2015-01231-02  
Demandante: JAIME ANTONIO VALLEJO TOBÓN  
Demandado: COLPENSIONES Y LA AFP PROVENIR  
Asunto: APELACIÓN DE AUTO QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN  
DE COSTAS

**EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, se constituyó en audiencia pública con el fin de emitir la correspondiente decisión, respecto a la apelación del auto que declaró en firme la liquidación de costas.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogiéndose el proyecto presentado por el Magistrado Ponente, doctor **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**.

**ANTECEDENTES**

Dentro del proceso de referencia, se pretendió la declaratoria de ineficacia de traslado entre regímenes pensionales, a efectos de retornar al RPM con el reintegro de las sumas acopiadas dentro del RAIS. En sentencia de primera instancia emitida el 4 de octubre de 2018 se acogieron parcialmente las súplicas en tanto se dispuso el reconocimiento pensional a cargo de la AFP accionada pero aplicando las reglas del régimen de prima media, decisión que fue revocada por esta corporación declarando la ineficacia del traslado entre regímenes y

disponiendo el reintegro de todos los recursos que Porvenir captó del actor, lo que habría de cumplirse en un término no superior a 30 días desde la ejecutoria de la sentencia, gravando en costas a la AFP Porvenir.

Posteriormente fueron liquidadas las costas procesales, que comprendió las agencias en derecho en primera instancia por valor de \$3'900.000 y en segunda instancia de \$908.526, para un total de \$4'808.526

Inconforme con el importe de la condena fue controvertida por la AFP Porvenir, quien estima que asignar las agencias en derecho en un monto equivalente a 4 SMLMV resulta excesivo y no guarda coherencia con las particularidades del trámite, refiriendo que la accionada obró de buena fe.

Decisión que mantuvo el fallador de primera instancia, tras referir que las agencias en derecho asignadas se ajustan a los rangos establecidos por el acuerdo 1887 de 2003.

### **ALEGATOS**

Concedido el término establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 Colpensiones presentó escrito en el que avala las consideraciones y conclusiones del A quo.

### **CONNSIDERACIONES**

En los términos del artículo 365 del C.G.P, se grava con costas a la parte que resulte vencida en el proceso o a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso, las excepciones previas, entre otras.

Ahora bien, sobre la forma en que se fijan las agencias en derecho, dispone el mismo artículo que la condena en costas se incluye en la misma actuación que

dio lugar a ellas, pero la determinación del monto de las agencias, se reserva para un momento posterior, una vez esté ejecutoriada la decisión; liquidación efectuada por la secretaría y posteriormente, aprobada por el Juez. (Artículo 366 C.G.P)

Acorde con el artículo 365 del C.G.P aplicable en materia laboral, por remisión que hace el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S, ha de entenderse que la liquidación de costas comprende los gastos del proceso y las agencias en derecho, según las tarifas establecidas, que para este caso dada la fecha de inicio del trámite judicial, se regulan en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, fijando los rangos para tal liquidación; específicamente para los procesos declarativos estableció:

## **2.1. PROCESO ORDINARIO**

### **2.1.1. A favor del trabajador:**

*Única instancia.*

*Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

*En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

*Primera instancia.*

*Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

*En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

*Segunda instancia.*

*Hasta el cinco por cinco (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.*

*En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

**PARÁGRAFO.** *Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Adicional debe tenerse en cuenta que, para efectos de establecer el valor de las agencias en derecho, el funcionario Judicial habrá de moverse dentro de los rangos permitidos en la norma, atendiendo a criterios como la calidad y duración del proceso, las gestiones del apoderado, cuantía de la condena, entre otros aspectos (numeral 4° artículo 366 CP)

Ha de advertirse que la asignación de costas procesales corresponde a un cargo objetivo, que es asumido por la parte que resulta vencida en el trámite al margen de la conducta asumida, así ha indicado la Sala de Casación Laboral de la CSJ, que puede verse en providencia AL4123-2019:

*Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que las costas no son consecuencia de un proceder determinado de las partes, de allí que no interese para su imposición que se haya actuado de buena o mala fe, diligente o negligentemente. Ello por cuanto actuar con probidad y sensatez es un deber que se le exige a toda persona que acude a la justicia a reclamar un derecho, de allí que las costas derivan objetivamente del resultado de un proceso o recurso formulado y, bajo esa lógica, simplemente quien sea vencido deberá asumir su pago.*

*De esta forma, la condena en costas contiene una obligación procesal que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir, en tanto la contraparte, al interponer el recurso de casación, lo compele a seguir atendiendo el proceso y a realizar nuevas erogaciones. (AL3132-2017, AL3612-2017 y AL5355-2017).*

En **el caso concreto** se advierte que el trámite judicial ha tenido un devenir moderado, en razón a los trámites para la conformación de la litis, el término de espera para la fijación de las diligencias, que se surtieron el 4 de octubre de 2018 en primera instancia y luego desatada la segunda instancia el 3 de junio de 2020 emitiéndose la decisión de fondo donde fueron acogidas parcialmente los argumentos de disenso de los apelantes y señalando como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV a cargo de la AFP Porvenir en favor de la activa.

Valorados estas características y de cara a los aspectos expuestos por la recurrente no se identifican argumentos que lleven a modificar la condena en agencias en derecho, no solo porque el monto asignado en ambas instancias se halla dentro del rango asignado para las condenas por obligaciones de hacer (de 1 a 4 SMLMV en primera instancia y hasta 2 SMLMV en segunda instancia) sino que los mismos recompensan los factores propios del caso analizado.

Se destaca que la conducta asumida no es un componente que genere una atenuación de la consecuencia procesal de resultar vencido en el trámite, en tanto el obrar con rectitud y probidad es un deber inherente al ejercicio del mandato judicial y la respuesta esperada de las partes cuando acuden a la jurisdicción en busca de la solución de las controversias.

Así las cosas, sin que se devalen criterios para modificar la decisión del a quo, esta se mantendrá, despachando desfavorablemente el recurso de apelación.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **confirma** la providencia impugnada.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en estados, y se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

*Ausencia justificada*

**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 11 de julio de 2022